



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expte. N°: 15756/2011

Autos: “SPOSITO MARIA DOMINGA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”

Sentencia Interlocutoria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a la Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la resolución de fecha 11 de abril de 2023 que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la parte actora, declara la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 y del art. 55 de la ley 18.037. Manda a llevar adelante la ejecución condenando a la ANSeS al reajuste del haber mensual bruto, correspondiente al mes de enero de 2023 en la suma de \$ 450.104,25; sin perjuicio de los aumentos generales que pudieran corresponder y las diferencias retroactivas por la suma de \$ 14.953.932,87 en concepto de capital e intereses no imponibles, (lapso comprendido entre el 14/09/2008 hasta el 31/01/2023). Asimismo regula los honorarios de la representación letrada de la parte actora en la suma de \$ 1.046.780, por la etapa posterior a la sentencia, con más el IVA si correspondiere de acuerdo a los arts. 6, 7, 8 y 40 de la ley 21.839 y art. 13 de la ley 24.432.

La demandada cuestiona la liquidación aprobada y la devolución de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias.

Por su parte, la representación letrada de la parte actora critica los emolumentos fijados a su favor por considerarlos bajos; entiende no se respetan los términos del art. 20 de la ley 27.423, realiza los cálculos que considera acertados que alcanza a un mínimo de 110,37 UMA.

En primer lugar, analizaré el memorial interpuesto por la accionada.

En relación a los agravios esgrimidos sobre la liquidación aprobada, la generalidad con que se intenta objetarla no resulta idónea a los fines pretendidos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los términos del art. 504 del C.P.C.C.N., no habiendo demostrado la existencia de error en los números o aplicación del derecho.

Se ha dicho que “aprobada la liquidación en cuanto ha lugar por derecho”, la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (conf. C.N. Civ. Sala B, in re Consorcio de Propietarios Cangallo 2285 c/Wedovot, Enrique y otros, del 23-11-95; C.N. Fed. Civ. Y Com. Sala I, causa 1362, del 28-9-90; C. Nac.Cont. Adm. Fed. Sala I, C. 24.397/93 “Olmi Goñi, Carlos s/in. Ejec. De sent. del 21-8-96, etc).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

A ello cabe agregar respecto a los supuestos errores materiales invocados por la ejecutada, ésta omite practicar las cuentas que a su juicio son las correctas. La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error. Habiéndose omitido tal recaudo se rechaza el agravio.

En cuanto a la retención del impuesto a las ganancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en casos de aristas similares, ver “García Blanco Esteban c/ ANSES s/ reajustes varios” CSS 23339/2009/CS1 sentencia del 6 de mayo de 2021; “García Marta Susana c/ ANSES s/ Reajustes Varios”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, “García María Isabel c/ ANSES s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26 de marzo de 2019, “Garay Corina Elena c/ANSeS S/Reajustes Varios” Sentencia del 7 de diciembre de 2021, CSS 60858/2009/CA1-CS1, entre otros. En atención a ello, cuestiones de economía y celeridad procesal obligan a remitirse a dichos fundamentos, confirmándose lo dispuesto en la instancia de grado.

Sobre las restantes cuestiones alegadas por el organismo administrativo, omito pronunciarme por resultar inconducente para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido el Alto Tribunal ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones" (CS, nov 4/97 “Wiater c/Min. de Economía”, LA LEY, 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; entre otros).

En cuanto a la crítica de la Dra. Ana Telma Britos T.26 F.422 sobre los emolumentos fijados a su favor, toda vez que sus agravios giran en torno a la ley 27.423, resulta indispensable analizar la normativa aplicable al caso en tanto la presente ejecución de sentencia ha sido promovida en fecha 21 de octubre de 2016 y la magistrada de grado los reguló en el marco de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

Sobre dicho tema nuestro Máximo Tribunal en la causa [“Establecimientos Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ Acción Declarativa”](#), sentencia del 4 de septiembre de 2018, en el considerando 3º) segundo párrafo, expresamente dispuso: “... en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros). ... el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352; 318:445-





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

en especial considerando 7°; 318: 1887; 319:1479; 323:2577; 331:1123, entre otros).”. Del mismo modo, ver autos [“ALL, JORGE EMILIO Y OTRO s/ sucesión ab intestato”](#) sentencia de fecha 26 de Abril de 2022.

Así también, en la causa [“ÁLVAREZ DANIEL C/PNA S/AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION”](#) sentencia del 28 de Octubre de 2021 el Tribunal Címero en el considerando 4° sostuvo: “... esta Corte ha dicho que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación y, por ello, el nuevo régimen legal (ley 27.423) no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (Fallos: 341:1063). *En el sub examine, la etapa procesal por la cual se regularon honorarios se inició el 19 de octubre de 2017, esto es, en forma previa a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la ley 27.423. Por tanto, dicha etapa tuvo principio de ejecución durante la vigencia de la ley 21.839 y sus modificatorias, y, por tanto, los trabajos profesionales desarrollados en ella deben ser determinados en los términos de esa última ley.*” (El resaltado me pertenece). De igual manera, expedientes originarios CSJ 1796/2016 y 1000/2017 caratulados [“OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE \(O.S.P.L.A.D.\) C/SANTA FE, PROVINCIA DE S/EJECUCION FISCAL”](#) ambas resoluciones de fecha 25 de abril de 2023.

Por todo ello, en el caso a estudio, las tareas realizadas en la primera etapa ejecutiva deben valorarse por la ley 21.839 modificada por ley 24.432, que era la vigente a la fecha de inicio de la acción (21 de octubre de 2016).

Aclarada la normativa aplicable, en atención al mérito e importancia de la tarea cumplida por la Dra. Britos desde el escrito inicial y hasta el dictado de la sentencia, teniendo presente que no se han opuesto excepciones y el resultado que se ha obtenido, considero deben elevarse los honorarios a la suma de \$ 1.345.854 de conformidad con los arts. 6, 7, 8 y 40 de la ley 21.839 mod. por ley 24.432, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

Por los fundamentos expuestos propicio: 1°) Elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora a la suma de \$ 1.345.854 con más el IVA en caso de corresponder (conf. arts. 6, 7, 8 y 40 de la Ley 21.839, mod. por Ley 24.432). 2°) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y ha sido materia de agravios por la demandada. 3°) Costas de Alzada a la accionada vencida (conf. art. 68 del CPCCN). 4) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en la suma de \$ 405.968 equivalente a la cantidad de 16 UMA -conf. art. 30 de la ley 27.423 y Resolución CSJN 2722/23-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93) y 5º)
Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

EL DOCTOR JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Preliminarmente debo aclarar que seguidamente habré de pronunciarme, más allá del carácter invocado por la peticionante en su escrito, lo que ha llevado a esta Sala en muchos precedentes a no dar tratamiento a los recursos respectivos (en tal sentido ver lo decidido en autos: "LOYOLA DANIEL ANSELMO Y OTROS c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos s/ Personal Militar y Civil de la Fuerzas Armadas y de Seguridad". Causa n°: 7338/2009. Sent. del 02/08/2017; “ZABALA JUAN CARLOS c/ MINI.DE DEF.EST.MAYOR GRAL. A.R.A. Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” Causa n° 81413/2014 Sent. del 10/07/2023 y “VACA JORGE CARLOS Y OTROS c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” CAUSA n° 113711/2017 Sent. del 28/08/2023; entre otros.)

Comparto el voto de la Dra. Dorado con excepción de lo relativo a la resolución del recurso deducido por la dirección letrada de la parte actora en lo que respecta a sus honorarios.

Ello así toda vez que, tal como lo señalé en el precedente [“O.S. PERS.EDIF.DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA R.A. c/ANCHORENA 976 CONSORCIO DE PROPIETARIOS s/EJECUCION LEY 23660”](#) expediente 140209/2017 Sentencia Interlocutoria de fecha 18 de octubre de 2023, a partir del Fallo del Tribunal Címero en [“MORALES, BLANCA AZUCENA c/ ANSeS s/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO”](#) de fecha 22 de junio de 2023 se impone una relectura de la interpretación que oportunamente le diéramos en el fuero a la doctrina resultante del precedente [“Establecimientos Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ Acción Declarativa”](#).

En el caso concreto de “Establecimiento Las Marías”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante tareas realizadas en plena vigencia de la ley 21.839 y no quedando otra cuestión pendiente más que la regulación de los emolumentos correspondientes, decidió no aplicar retroactivamente la ley 27.423, así evitó regular con la nueva ley arancelaria tareas profesionales que fueron realizadas en vigencia de la ley anterior. Lo cual, a mi entender, se compadece estrictamente con la suerte que corriera el art. 64 de la ley 27.423 frente a su observación por parte del art. 7 del Decreto 1077/17. En ese orden de ideas, la expresión etapas cumplidas o con principio de ejecución, refuerza lo allí decidido sin implicancia disvaliosa alguna a la hora de fijar emolumentos profesionales de eminente naturaleza alimentaria.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ahora bien, en casos como el de marras, por el contrario, no se debe arribar a una aplicación literal y exegética del considerando 3 del fallo “Las Marías”, sino que debe tomarse de aquel la correcta doctrina que sostiene que el derecho del profesional nace de conformidad con la disposición arancelaria vigente a la fecha de la realización de sus presentaciones profesionales. Es decir, que no debemos incurrir en una aplicación ultraactiva de la ley 21.839. Las observaciones efectuadas por el Alto Tribunal en “Las Marías” fueron tendientes a evitar la aplicación retroactiva de las disposiciones de la ley 27.423 pero no la promoción de aplicar la ley 21.839 a tareas profesionales desarrolladas después de su derogación.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el Alto Tribunal se expidió aplicando las pautas establecidas en las leyes 21.839 y 27.423 teniendo en cuenta el tiempo en que fueron realizados los trabajos que dieron lugar a la regulación. En tal sentido ver lo decidido en autos: “HELMAN ALFREDO JACOBO c/ M° de justicia y DDHH s/ indemnizaciones-ley 24.043 -art. 3°” de fecha 3 de agosto de 2023; “BOCCARDO LILIANA” del 23 de mayo de 2023; “HOLGADO, MYRIAM CRISTINA c/M° JUSTICIA Y DDHH s/INDEMNIZACIONES – LEY 24.043 – ART. 3” sentencia del 3/10/2023; “FERNANDEZ, SOLEDAD c/M° JUSTICIA Y DDHH s/INDEMNIZACIONES – LEY 24.043 – ART. 3” decisorio del 3/10/2023; entre otros.

Consecuentemente, teniendo en cuenta la labor desplegada por la Dra. Britos entre el 5 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, he de confirmar lo regulado por la Sra. jueza de primera instancia de conformidad a lo establecido en los arts. 6, 7, 8, 40 y concordantes de la ley 21.839 modificada por ley 24.432. Ello así en la inteligencia de que ese es el monto que corresponde regular en favor de la dirección letrada de la parte actora por su actuación durante la vigencia de la ley arancelaria anterior.

Por lo expuesto, entiendo que restan regular las presentaciones efectuadas por la representación letrada de la parte actora entre el 1/2/2018 y el 10/04/23, es decir en plena vigencia de la ley 27.423.

Por consiguiente, deben regularse los honorarios tomándose el valor de la UMA que se encontraba vigente al momento de corte del cálculo aprobado -en el caso, a la fecha 31/1/23 la unidad monetaria arancelaria equivalía a \$ 13.228 conforme Acordada C.S.J.N. 9/23- y el monto aprobado de \$ 14.953.932,87, la base regulatoria alcanza a la cantidad de 1.130,47 UMA. De acuerdo al mérito e importancia de las tareas realizadas en el lapso precedentemente señalado, corresponde fijar los estipendios en la suma de \$ 1.370.142 equivalente –a la fecha de la presente resolución- a la cantidad de 54 UMA de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 16, 21, 24, 41 y 51 de la ley 27.423 y Resolución C.S.J.N. 2722/23, con la adición del I.V.A. en caso de corresponder.

Por último, respecto al agravio vertido reclamando la aplicación del art. 20 de la ley 27.423, en atención a lo resuelto oportunamente por este Tribunal en los autos: [“ALDANA](#)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

[JULIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS](#)", de fecha 16 de agosto de 2023, debe estarse a sus fundamentos, al que me remito en honor a la brevedad. Por lo que se desestima la petición en tal sentido.

Por lo expuesto voto por: 1º) Revocar parcialmente la resolución de grado; 2º) Confirmar el monto de los honorarios fijados a favor de la Dra. Ana Telma Britos T.26 F.422 en la suma de \$ 1.046.780 exclusivamente por las tareas desarrolladas en vigencia de la ley 21.839 mod. por ley 24.432; 3º) Regular los emolumentos de la dirección letrada de la actora por su labor desplegada entre el 1/2/18 y el 10/4/23 -en vigencia de la ley 27.423- en la suma de \$ 1.370.142 equivalente –a la fecha de la presente resolución- a la cantidad de 54 UMA de conformidad a lo establecido en los arts. 16, 21, 24, 41 y 51 de la actual ley de honorarios y Resolución C.S.J.N. 2722/23, con la adición del I.V.A. en caso de corresponder. 4º) Confirmar la sentencia apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravios por la parte demandada. 5º) Costas de Alzada a la accionada vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.). 6º) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en la suma de \$ 735.817 equivalente a la cantidad de 29 UMA -conf. art. 30 de la ley 27.423 y Resolución CSJN 2722/23-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93) y 7º) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

LA DOCTORA ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA DIJO:

En atención a mi convocatoria a pronunciarme sobre la cuestión en la que no se ha obtenido mayoría relativa a los honorarios regulados a la dirección letrada de la parte actora, adhiero a la solución propuesta por la Dra. Dorado.

A mérito de lo que resulta del voto mayoritario, el Tribunal **RESUELVE**: 1º) Elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora a la suma de \$ 1.345.854 con más el IVA en caso de corresponder (conf. arts. 6, 7, 8 y 40 de la Ley 21.839, mod. por Ley 24.432). 2º) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y ha sido materia de agravios por la demandada. 3º) Costas de Alzada a la accionada vencida (conf. art. 68 del CPCCN). 4) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en la suma de \$ 405.968 equivalente a la cantidad de 16 UMA -conf. art. 30 de la ley 27.423 y Resolución CSJN 2722/23-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93) y 5º) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

EL DOCTOR WALTER FABIÁN CARNOTA NO SUSCRIBE LA PRESENTE POR HABERSE EXCUSADO (ART.109 RJN)





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE
JUEZ DE CÁMARA

NORA CARMEN DORADO
JUEZ DE CÁMARA

ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA
JUEZ DE CÁMARA

ANTE MÍ:
MARINA MALVA D'ONOFRIO
SECRETARIA DE CÁMARA

KPB

